

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020)

SENTENCIA

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandantes : PIEDAD LUCÍA SIERRA ECHEVERRI, CRISTIAN CAMILO CATAÑO SIERRA y MARIA CRISTINA CATAÑO SIERRA
Demandados : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOFEMA Y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Litis consorte necesario por pasiva : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Llamada en garantía : COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. –CONFIANZA-
Radicado : 05001-31-05-012-2012-01169-02
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Laboral Individual –Accidente Laboral, culpa empleador, indemnización perjuicios -
Decisión : Confirma decisión absolutoria
Sentencia N° : 191

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de*

justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita que previa declaración de relación laboral, **se condene solidariamente** a las codemandadas a **pagar la indemnización plena de perjuicios** de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que comprende: perjuicios patrimoniales -daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro- y perjuicios extrapatrimoniales -perjuicio moral objetivo, subjetivo y perjuicio fisiológico; **indexación** de las condenas y costas del proceso.

Hechos Relevantes de la Demanda:

Afirma el apoderado de la parte actora que el señor Guillermo León Cataño Meneses, laboró en El Parque de las Aguas, a cargo y bajo la responsabilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburra, en el cargo de Piscinero, desde que la misma abrió sus puertas en el Departamento de Antioquia, desde hacía 13 años aproximadamente, no obstante, desde el 1° de septiembre de 2007, desarrollaba las mismas funciones en el mismo centro como trabajador “asociado” a la Cooperativa de Trabajo Asociado Coofema (antes Cooperativa Industrial Femenina de Moravia -COFEMA-), a través del contrato consorcio Serconal-Cofema.

Considera que el Guillermo León Cataño Meneses era en realidad un trabajador subordinado de la cooperativa Coofema, desarrollando funciones en

beneficio del Área Metropolitana, estando sometido en el lugar donde realizaba su labor al cumplimiento de órdenes, horarios, desarrollaba su labor con elementos de los demandados, debía pedir permiso y podía ser sancionado

Cuenta que el 19 de noviembre de 2009 (sic), el señor Guillermo León Cataño Meneses sufrió un accidente que le causó la muerte, cuando se encontraba realizando labores de limpieza en el cuarto de máquinas de una de las atracciones acuáticas del centro recreativo, conocida como Río Lento, en cumplimiento a lo ordenado por sus superiores, ya que ese día se había presentado una inundación en el cuarto de máquinas, razón por la cual la labor se hacía más peligrosa, siendo necesario el uso de una bomba eléctrica y requiriendo de una protección especial de la cual carecían los trabajadores del parque, en el caso del causante ni siquiera la mínima de botas dieléctricas o guantes aisladores, simplemente con botas de caucho y guantes normales para la recolección de residuos en el parque; que así mismo no se realizó ningún tipo de advertencia o instrucción especial al causante por parte de sus superiores.

Manifiesta que el causante estaba con el señor Juan Carlos Cañas, quien le colaboraba en esa labor, pero salió del cuarto de máquinas con la complacencia de su compañero Guillermo León Cataño Meneses porque se sintió fatigado y estando en su receso sintió los gritos de éste último pidiendo auxilio y que apagara la bomba sumergible, por lo que regresó al cuarto de máquinas y apagó la bomba y al ver que su compañero había recibido una descarga eléctrica trató de sacarlo, notificando de lo sucedido, llegando al lugar de los hechos el paramédico encargado y los demás compañeros a colaboradores, pero en ese momento el parque no contaba con equipos como desfibriladores, ni con una ambulancia que permitiera su traslado, por lo que fue llevado en un carro particular mientras el paramédico y sus compañeros realizaban maniobras de reanimación cardiovascular.

Considera que en el accidente que le costó la vida al señor Guillermo León Cataño Meneses medió impericia, imprudencia y notoria negligencia de Coofema y de la entidad beneficiaria del servicio Área Metropolitana del Valle de Aburra que, como encargados del complejo recreativo, al no tener una adecuada prevención y protección para sus trabajadores, control que si se hubiera realizado hubiera podido evitar accidentes de esta magnitud.

Respuesta de la Parte Demandada:

Efectuadas las diligencias de notificación y traslado de la demanda, el **ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA**, a través de apoderado judicial dio respuesta a la demanda¹, indicando que no es cierto que el señor Guillermo León Cataño Meneses fuera trabajador de su mandante, sino que era asociado de la Cooperativa de Trabajo Asociado Coofema, la cual era contratista de la entidad y como tal prestaba sus servicios. Agrega que el servicio de mantenimiento de piscinas en el Parque Metropolitano de Las Aguas no lo realizaba ni realiza el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pues para ello se contratan empresas.

Asegura que no es cierto que no se suministraran los elementos de protección, pues el 5 de septiembre de 2008 se remite por parte del señor John Jairo Serna Ospina al coordinador operativo del parque botas dieléctricas talla 39 para el causante señor Guillermo León Cataño Meneses, quien había estado en jornadas de capacitación y tenía más de 10 años de experiencia en el tema.

Manifiesta que en el contrato celebrado con el Consorcio Serconal, para la prestación del servicio de aseo, mantenimiento de equipos, piscinas e instalaciones locativas, se establece que una de las obligaciones del contratista es

¹ Folios 70 a 80.

la de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, usando los equipos de protección adecuados en cada sitio de trabajo.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de relación laboral, falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, carencia de acción o derecho para reclamar; falta de nexo causal entre la actuación de su representada y daño sufrido; culpa exclusiva de la víctima y ausencia total de pruebas.

Por su parte las COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO COOFEMA y SERCONAL, ésta última vinculada como litis consorte necesario por pasiva, a través de apoderada judicial dieron respuesta a la demanda², indicando que el accidente del causante fue el 19 de noviembre de 2008 y no del 2009 como erradamente se indica en la demanda; que el causante desarrolló las funciones de Piscinero desde el 1° de septiembre de 2007 como trabajador asociado a su mandante, prestando sus servicios al Parque de Las Aguas a través de un contrato con el consorcio Serconal - Coofema, sin que fuera un trabajador subordinado.

Manifiesta que se acepta que la labor realizada por el señor Guillermo León Cataño Meneses era la de mantenimiento requiriendo la utilización de una bomba eléctrica y de protección especial, no siendo cierto que no haya contado con dicha protección, por cuanto se le hizo entrega oportuna de todos los elementos de protección para la ejecución de las tareas que se le encomendaron. Asegura que el causante señor Guillermo León Cataño Meneses tenía amplia experiencia en el oficio que realizaba y había asistido a múltiples eventos de capacitación y que a pesar de ello ingresó al lugar de los hechos sin los elementos de protección.

² Folios 175 a 187 y 345 a 358.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones de mérito que denominó: prescripción; culpa exclusiva de la víctima; inexistencia de la obligación de indemnizar u ausencia de culpa en la demandada; inexistencia de perjuicios materiales e inexistencia de perjuicios fisiológicos y cobro de lo no debido.

Llamamiento en Garantía:

Por solicitud del apoderado del Área Metropolitana del Valle de Aburra, el Juzgado de Primera Instancia llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. –CONFIANZA-³, sociedad que una vez notificada dio respuesta a través de apoderada judicial⁴, solicitando la prueba de los hechos de la demanda por cuanto son ajenos a su mandante y se opuso a las pretensiones de la demanda.

Respecto al llamamiento en garantía, se opuso al mismo, indicando que el amparo de la póliza es sobre salarios, prestaciones e indemnizaciones relacionadas con el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, no así de las indemnizaciones consagradas en el artículo 216 ibidem y que la póliza fue modificada en varias oportunidades mediante certificaciones, sin que ninguno de ellos aplique al presente asunto, ya que el siniestro ocurrió fuera de sus vigencias.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín**, mediante Sentencia **Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación de indemnizar** propuesta por las Cooperativas de Trabajo Asociado Coofema y Serconal. **Absolvió** a la Cooperativas de Trabajo Asociado Coofema, a la

³ Folios 119 a 121 y 250.

Cooperativas de Trabajo Asociado Serconal y al Área Metropolitana del Valle de Aburra de todas las pretensiones de la demanda. **Condenó** en costas a cargo de la parte demandante y a favor de las accionadas por partes iguales, fijando como agencias en derecho la suma de \$781.242,00.

Para fundamentar la decisión anterior, argumentó la a quo que se estableció que el señor Guillermo León Cataño Meneses fue enviado por Coofema a prestar sus servicios personales al denominado Parque de las Aguas desempeñándose como Piscinero, labor que fue desarrollada por el causante con dependencia respecto del Área Metropolitana del Valle de Aburra al haber existido el elemento subordinación, concluyendo en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, que el causante realmente estuvo vinculado laboralmente al Área Metropolitana del Valle de Aburra, siendo la cooperativa una simple intermediaria.

En lo relativo a la culpa patronal, indicó que incumbía a la parte demandante acreditar que el accidente de trabajo sufrido por el señor Guillermo León Cataño Meneses se presentó por culpa del empleador al no haber tenido este aquella diligencia y cuidado que se le exige para proteger la seguridad y la salud del trabajador y que en el asunto debatido, acogiendo las manifestaciones de las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, lo expresado por el único declarante Juan Carlos Cañas Sosa y las pruebas documentales que obran en el proceso, se concluye que el fallecimiento del causante sobrevino por un hecho desconocido, toda vez que no se cuenta con información precisa sobre el particular pues se ignora cuáles fueron los motivos que originaron tal suceso, sin que obre prueba que de cuenta que hubiese mediado culpa imputable a las demandas, lo que se infiere del único testigo quien indicó que la bomba sumergible estaba en buen estado de funcionamiento y es

⁴ Folios 260 a 269.

sellada, le hacían mantenimiento cada 3 o 4 meses y que para ese mantenimiento del cuarto de máquinas suministran botas y guantes apropiados, los cuales el causante utilizaba en ese momento y no sabe que produjo el accidente; que el causante tenía experiencia en ese oficio y era capacitado para esta labor cada mes o 2 meses y le suministra elementos de seguridad, lo que igualmente se corrobora con la prueba documental allegada al plenario, por lo que absolvió de la indemnización de perjuicios.

Y respecto a la prescripción, indicó que no se configuró la misma ya que el fallecimiento del causante ocurrió el 19 noviembre de 2008 y se intentó conciliar ante la Procuraduría 31 Judicial el 12 enero de 2011 y se presentó la demanda el 18 de septiembre de 2012, sin que transcurriera el término prescriptivo de 3 años, toda vez que con el intento conciliatorio se interrumpió la prescripción.

Recursos de Apelación:

Inconformes con la decisión anterior, los apoderados de la parte demandante, la demandada Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de las cooperativas de trabajo asociado Coofema y Serconal, formularon recurso de apelación, así:

El apoderado de la parte demandante manifiesta que con el testimonio del señor Juan Carlos Cañas se puede inferir con claridad que los implementos de seguridad suministrados por sus empleadores al causante no eran los adecuados para poder menguar cualquier tipo de incidencia eléctrica en un cuarto de máquinas, indicando que tanto él como el causante tenía unas botas normales que le daban a la rodilla, de lo que infiere que esas botas no aislaban la electricidad al entrar al cuarto de máquinas.

Indica que además las pruebas documentales recaudadas, donde se infieren unas capacitaciones que hacen referencia al mantenimiento del cuarto de máquinas, no se tiene un detalle que permitan determinar cuáles fueron las capacitaciones o información detallada que le pudieron suministrar al demandante durante los 14 años que estuvo al servicio en el parque de las aguas, de las que se pudiera inferir que efectivamente él tenía pleno conocimiento de que no podía ingresar a un cuarto de máquinas donde podía recibir una descarga eléctrica.

Sostiene que cuando se encontró el cuerpo, lo cual se evidencia tanto en los dictámenes del hospital San Rafael como de la Fiscalía que aparecen en el expediente, no se entiende como en un cuarto de máquinas hay un nivel superior a los 7 centímetros de agua, sin haber restricciones para que una persona ingrese allí con ese nivel de agua y con una bomba eléctrica prendida en su interior, de lo que infiere debieron haber existido unas señales de advertencia en su ingreso o no haberle permitido ingresar allí porque había un peligro inminente, situación que de entrada se observa ya que ni los elementos de protección ni el estado del cuarto de máquinas al cual entró el señor Guillermo León Cataño al momento del accidente ó las condiciones óptimas del lugar dadas por el empleador eran las adecuadas para que él prestara su servicio.

Asevera que de la misma documentación, en las observaciones de porqué sucedió el evento, se evidencia que existían escombros dentro del cuarto de máquinas que generaban un mal funcionamiento de la bomba de agua y que ésta estaba algo suelta del piso, situación que perfectamente se pudo determinar por negligencia del empleador por no hacer el mantenimiento adecuado. Agrega que el declarante Juan Carlos Cañas manifestó que consideraba que a la bomba de agua había que hacerle mantenimiento cada 3 ó 4 meses, sin embargo, la *a quo* en sus argumentos indicó que el mantenimiento se hacía cada 3 ó 4 meses, lo que no es cierto, pues de la prueba allegada al plenario no se infiere

mantenimiento alguno al cuarto de máquinas y mucho de la bomba de agua y por el contrario el testigo manifestó que no vio que se hiciera mantenimiento.

Considera que existe una negligencia por parte del empleador, porque debió de haber mantenido en óptimas condiciones el lugar de trabajo del causante, para evitar cualquier riesgo para su vida como de sus compañeros de trabajo, siendo evidente que no contaba con los implementos necesarios para mitigar un riesgo como el que ocasionó su muerte; que posteriormente al evento ocurrido es evidente, pues así se infiere de los dictámenes que se generaron tanto por el mismo empleador como por el hospital San Rafael, que al causante se le sacó del cuarto de máquinas a la 1:35 p.m. aún con vida, ya que presentaba ritmo cardíaco y respiración, sin embargo por la negligencia del empleador, de no tener los implementos necesarios para darle unos primeros auxilios de primer nivel llámese desfibrilador, una camilla cercana, porque la que utilizaron llegó 15 ó 20 minutos más tarde cuando ya lo habían sacado del cuarto de máquinas por cuanto estaba en el área administrativa; trataron de reanimarlo con una bomba de aire que no tiene la misma consistencia de un desfibrilador y lo trasladan no con una ambulancia que debe de estar en un parque acuático que presta servicio al público para que pueda evitar cualquier riesgo que se pueda generar en su interior, sino en una camioneta de propiedad de la señora María Eugenia, quien era administradora del parque y trabajadora del Área Metropolitana, llegando al hospital en unas condiciones no aptas a las 2:30 p.m., cuando el evento ocurrió a la 1:35 p.m., generando una culpa directa del empleador porque el señor Guillermo aún continuaba vivo, observándose negligencia del empleador porque desde antes del accidente no se tenían los implementos de protección, siendo atendido cuando habían pasado más de 55 minutos después de haber recibido una carga eléctrica de 440 watts de potencia, sin que se entienda como el empleador no determinó la importancia de tener todas las condiciones aptas tanto para que el causante preste sus servicios como para poderle prestar unos primeros auxilios de manera de manera óptima, pues de haber sido así muy

posiblemente el causante estuviese vivo y su familiar no hubiera tenido que atravesar por todo el dolor y padecimiento que ocasionó su muerte.

Sostiene que de la prueba documental, testimonial y de los interrogatorios de parte se puede inferir que el señor Cañas y el causante prestaban un servicio al Área Metropolitana y se consideraban empleados de la misma, tenían un horario de trabajo y el causante cumplía sus labores desde hacía 14 años en este parque.

Concluye que se evidencia negligencia y una culpa patronal que debería acarrear las consecuencias del artículo 216, estando demostrado que el causante trabajó y benefició directamente al Área Metropolitana durante 14 años, por lo que solicita se revoque la decisión de Primera Instancia y se condene al pago de las pretensiones invocadas en la demanda.

Por su parte el apoderado del **Área Metropolitana**, manifiesta que apela la decisión en cuanto a la declaratoria de una relación laboral entre el Área Metropolitana y el señor Guillermo Cataño, ésta no es la jurisdicción competente frente al Área Metropolitana, en tanto es una entidad administrativa del Estado que no tiene y trabajadores oficiales sino que todos sus funcionarios son empleados públicos vinculados a través de un acto administrativo, siendo por tanto competencia del Juez administrativo. Indica que se formuló excepción previa de falta de competencia que fue denegada en 1ª Instancia y confirmada en este Tribunal, argumentándose que esta jurisdicción era competente en la medida de que su mandante solo había sido citada como beneficiaria y no como empleador del causante.

Sostiene que en cuanto a lo argumentado por la *a quo* sobre la existencia de una dependencia y una subordinación entre el señor Guillermo

Cataño y el Área Metropolitana en razón a que había una directora o jefe que eventualmente podía dar órdenes, debe tenerse en cuenta que la Ley 80 de 1993, estatuto general de contratación, le obliga al Estado vigilar y controlar todos los contratos que suscriben, lo cual se hace a través de un supervisor a quien el despacho desafortunadamente lo confunde con el empleador, cuando en realidad lo que estaba haciendo era vigilar que el contrato efectivamente se ejecutará y no por esa razón se configure una relación de subordinación entre esa persona natural que trabaja para el contratista y el Estado.

Y el apoderado de las cooperativas de trabajo asociado Coofema y Serconal, manifiesta que su inconformidad radica en cuanto a la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo, argumentando que además de lo indicado por el apoderado del Área Metropolitana, debe tenerse en cuenta que si se mira la demanda y las pretensiones de la misma se llega a la conclusión que la *a quo* declaró la existencia de un contrato de trabajo de manera oficiosa, ya que no está claro que el proceso tenga por finalidad que operen la primacía de la realidad para que se declare la existencia de un contrato de trabajo, simplemente se hacen algunas aseveraciones aisladas que pueden ir en ese sentido, pero no hay un hecho concreto donde diga que el causante no estuvo vinculado realmente a través de una cooperativa porque las cooperativas deben funcionar así y no lo hicieron y tampoco hay ninguna pretensión donde se solicite se declare que es contrato de trabajo y no una relación propia del derecho cooperativo y que si bien es cierto el Juez laboral puede fallar ultra y extra petita, ello procede cuando en el proceso hayan quedado demostrados los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para la respectiva declaración y en este caso la parte demandante no hizo el más mínimo esfuerzo por desvirtuar la existencia de una vinculación regida por el derecho cooperativo para dar operatividad del principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas de manera, sin que en este caso se esté en presencia de un contrato de trabajo, sino una relación propia de una

cooperativa de trabajo asociado, por lo tanto no está de acuerdo en ese sentido con el fallo.

Indica que no está de acuerdo en cuanto a que se determinó que en este caso no operó el fenómeno de la prescripción, lo cual se fundamentó en la solicitud que hizo la parte demandante ante la Procuraduría General de la Nación, lo cual no es así por cuanto en materia laboral la conciliación no es requisito de procedibilidad y como lo indica la parte actora en el hecho 5.15 en la conciliación se agotó como una simple reclamación, con lo que considera que en la práctica lo que existió fue una reclamación administrativa que no comprende a sus representadas sino que pudo ser frente al Área Metropolitana; que si eventualmente hubo dicha reclamación respecto a sus mandantes, debe tenerse claro que los efectos de la reclamación administrativa consagrada en el artículo 6° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social es que suspende el término de prescripción, pero no la interrumpe, que son dos términos diferentes y por tanto una vez presentada la reclamación, se debe esperar el tiempo que tiene la entidad para contestar, estos es un mes, vencido el cual retoma vigencia el término que venía corriendo y de aceptarse que esa reclamación existió, a lo sumo la prescripción se suspendió por un mes. Agrega que la demanda fue presentada casi 4 años después de haber ocurrido el deceso del trabajador y en el caso de sus mandantes nunca se les presentó reclamación, por lo que no se interrumpió la prescripción, sólo vino hacerse con la presentación de la demanda cuando ya se había superado el término de 3 años.

Alegatos de Conclusión:

El apoderado de la parte demandante, presentó alegatos de conclusión, reiterando los argumentos esgrimidos en el recurso de Apelación e indicando además que la cooperativa de trabajo asociado realizó actividades y funciones propias de las empresas de servicios temporales, enviando trabajadores

como si su natural finalidad fuera la de proveer mano de obra a empresas usuarias, además que en este caso el causante estuvo subordinado siempre al Área Metropolitana del Valle de Aburra sin que ésta lograra desvirtuar que efectivamente se benefició del servicio prestado por el causante durante 14 años.

Asegura que las demandadas no lograron demostrar la existencia de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como tampoco un panorama de riesgos y programa de salud ocupacional anterior y posterior al suceso; que así mismo no se dotó de los implementos necesarios para mitigar el riesgo de una descarga eléctrica, lo que conlleva a establecer que no existía una prevención del riesgo frente al hecho que originó la muerte del señor Guillermo León Cataño, esto es, por descarga eléctrica, lo que genera un nexo causal entre la muerte del trabajador y la omisión del empleador o quien se benefició del servicio para establecer una culpa comprobada a cargo del empleador.

Considera que no se demostró que se hubieran realizado capacitaciones encaminadas a mitigar los riesgos frente a descargas eléctricas en cuarto de máquinas, ya que lo que se aportó fueron capacitaciones de primeros auxilios dirigidos por el SENA, las cuales fueron promovidos por el área metropolitana. Agrega que además de lo anterior, se constata en la documentación cuando se entra en las observaciones de por qué sucedió el evento, en los mismos documentos que aparecen en el expediente, se evidencia que existían escombros dentro del cuarto de máquinas que generaban un mal funcionamiento de la bomba de agua y que la bomba de agua se encontraba algo suelta del piso.

Conforme a lo anterior, solicitó se revoque la decisión de Primera Instancia y en su lugar se concedan todas las pretensiones que se solicitaron en la demanda.

Por su parte, el apoderado del Área Metropolitana del Valle de Aburra, aduce en sus alegatos que la parte actora no logró demostrar la responsabilidad del empleador en el accidente del señor Guillermo Cataño Meneses, pues no se probó la culpa de Coofema, Serconal o el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la ocurrencia de los hechos y por el contrario sí está acreditado con la prueba documental así como con el testimonio del señor Juan Carlos Cañas Sossa, que existió diligencia de dichas entidades en ofrecer condiciones de seguridad adecuadas al hoy occiso, para el cumplimiento de sus actividades en el Parque Metropolitano de Las Aguas.

Considera que la Jurisdicción ordinaria laboral no es la competente para declarar la supuesta relación laboral del señor Guillermo Cataño Meneses con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así como tampoco si se trata de una eventual responsabilidad civil extracontractual en el acaecimiento de los hechos, siendo el Juez natural el contencioso administrativo y no el laboral.

Atendiendo a lo anterior, solicita se confirme la decisión respecto a que el accidente del señor Guillermo Cataño Meneses, no fue producto de la culpa patronal, pero absteniéndose de resolver sobre la condición o no del Área Metropolitana frente a una supuesta relación laboral con el causante.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, entendiendo que las partes

quedaron conformes con lo resuelto de más; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 y los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Conflicto jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir por esta Sala de Decisión Laboral, consiste en determinar si hay lugar a revocar la Sentencia de recurrida, analizándose si como lo concluyó la Juez de Primera Instancia en sus considerandos existió un contrato de trabajo entre el causante Guillermo León Cataño Meneses y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, siendo las Cooperativas de Trabajo Asociado Coofema y Serconal simples intermediarias ó si el vínculo con estas lo fue en desarrollo de un convenio de trabajo asociado y si es esta la jurisdicción para conocer de las pretensiones formuladas en la demanda. Así mismo se analizará si existió culpa suficientemente comprobada del empleador en el accidente laboral en el cual falleció el señor Guillermo León Cataño Meneses y si se configuró la excepción de prescripción.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

1º Excepción de prescripción:

En cuanto a lo aducido por el apoderado de las Cooperativas de Trabajo Asociado Coofema y Serconal, en cuanto a que operó el fenómeno de la prescripción; encuentra esta Colegiatura que no le asiste razón al recurrente toda vez que:

Conforme a lo establecido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las obligaciones laborales, como las reclamadas en la demanda, prescriben en tres (3) años, contados desde el momento en que se hagan exigibles y que **el simple reclamo escrito sobre un derecho o prestación debidamente determinado**, interrumpirá la prescripción, por un lapso igual.

Encontrando esta Magistratura que en el asunto debatido, contrario a lo aducido por el recurrente, **sí se interrumpió en este caso la prescripción con la solicitud de conciliación extrajudicial realizada ante la Procuraduría 31 Judicial II**, ya que como se constata en la constancia y en el Acta 001 del 12 de enero de 2011, emitidos por dicha entidad⁵, las Cooperativas de Trabajo Asociado Coofema y Serconal, así como el Área Metropolitana del Valle de Aburra, concurrieron a la referida diligencia con sus representantes legales y apoderados, quienes fueron informados detalladamente de los conceptos reclamados por la parte demandante, como se verifica tanto en los referidos documentos, como en la solicitud de conciliación elevada ante los procuradores judiciales⁶, conceptos que corresponden a los pretendidos en este proceso, sin que tenga incidencia que en materia laboral no se exija la conciliación como un requisito de procedibilidad, pues lo que interesa para este proceso en cuanto a la prescripción, es que se haya realizado un **simple reclamo sobre el derecho o prestación debidamente determinado** como ocurrió en este caso.

Atendiendo a lo expuesto, se tiene que las obligaciones laborales que se pretenden en este proceso se hicieron exigibles a partir de la fecha de fallecimiento del causante Guillermo León Cataño Meneses, que lo fue el 19 de noviembre de 2008⁷, pero **al haberse efectuado reclamación por los demandantes**, a través de la solicitud de conciliación extrajudicial realizada ante

⁵ Folios 46 y 47.

⁶ Folios 96 a 107.

⁷ Folio 28.

la Procuraduría 31 Judicial II el 12 de enero de 2011, se interrumpió el fenómeno prescriptivo hasta el mismo día y mes del año 2014, por lo que al haberse presentado la demanda el 18 de septiembre de 2012⁸, no se configuró el término prescriptivo de tres (3) años, procediendo por tanto confirmar la decisión recurrida.

2º Vínculo existente entre el causante Guillermo León Cataño Meneses con las demandadas y de la competencia de esta jurisdicción:

Frente a las inconformidades de los apoderados del Área Metropolitana del Valle de Aburra y de las Cooperativas de Trabajo Asociado Coofema y Serconal, respecto al vínculo que las unió con el causante Guillermo León Cataño Meneses y a la competencia de esta jurisdicción respecto al Área Metropolitana, tenemos que:

En el presente caso, la Juez de Primera Instancia concluyó en la parte considerativa de su decisión de fondo, que existió un contrato realidad entre el señor Guillermo León Cataño Meneses y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, siendo las Cooperativas de Trabajo Asociado Coofema y Serconal simples intermediarias, decisión que no comparte esta Sala de Decisión, de un lado por cuanto **ello no fue objeto de pretensión en este proceso y por el contrario se aceptó por la parte actora en el hecho 5.2 de la demanda, que el causante era en realidad un trabajador subordinado de la cooperativa Coofema**, desarrollando funciones en beneficio del Área Metropolitana⁹, tal como igualmente lo aduce el apoderado de las Cooperativas demandadas en su recurso, siendo realmente el causante un trabajador asociado; pretendiéndose en la demanda, que previa declaración de relación laboral, se condene solidariamente a las demandadas a la indemnización plena de perjuicios.

⁸ Folio 12.

Además de lo anterior, si bien es cierto que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, establece que “*Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por contrato de trabajo*” también lo es que, al tratarse de una presunción, admite prueba en contrario y en asunto debatido, con la prueba obrante en el plenario se demuestra que el hoy causante era en realidad asociado del Consorcio conformado por las Cooperativa de Trabajo Asociado Coofema y Serconal y no trabajador del Área Metropolitana del Valle de Aburra; veamos:

Las Cooperativas de Trabajo Asociados, se encuentran reguladas por la Ley 79 de 1988, estableciendo en su artículo 59 que el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación, será establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo cooperativo.

Es así como, según su naturaleza jurídica, en la Cooperativas se pueden encontrar las siguientes formas de vinculación, unas de tipo laboral y otras no, veamos:

1) Trabajo dependiente, que se da en las Cooperativas que no son de trabajo asociado;

2) Trabajo asociado, es el que se presenta en las Cooperativas de Trabajo asociado, en las que vinculan el trabajo personal de sus socios, a la producción de bienes, ejecución de obra o la prestación de servicios, siendo la vinculación del trabajo personal y directo de los gestores regulada por conforme a las normas estatutarias, en lo relativo con la remuneración del trabajo, compensaciones, seguridad social y no por la legislación laboral; al respecto el artículo 70 de la Ley 79 de 1988, establece: “... las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan al trabajo personal de sus asociados para la

producción de bienes, ejecución de obras o **la prestación de servicios**". (Negritas fuera del texto).

3) Trabajo comunitario, es el que prestan los asociados en las etapas iniciales de funcionamiento de la cooperativa o en los períodos de crisis económicos, puede ser gratuito o convencionalmente remunerado; sobre este tipo de trabajo el artículo 58 de la referida Ley, preceptúa: *"Trabajo solidario. Los asociados de las cooperativas podrán prestar a éstas, en las etapas iniciales de su funcionamiento o en períodos de grave crisis económica, servicios personales a modo de colaboración solidaria y con carácter de gratuito o convencionalmente retribuido. ..."*

Por su parte, el **Decreto 4588 de 2006**, *"Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado"*, establece en su artículo 3° respecto a la naturaleza de estas entidades que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general¹⁰ y en lo relativo al objeto social de estas organizaciones solidarias y el artículo 5° *ibidem*, establece que es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno¹¹.

¹⁰ "ARTÍCULO 3°. NATURALEZA DE LAS COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. Son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general."

¹¹ ARTÍCULO 5°. OBJETO SOCIAL DE LAS COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. <Artículo compilado en el artículo 2.2.8.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1072 de 2015> El objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos se deberá precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al cumplimiento de su

Los artículos 16 y 17 de la normatividad en cita así como el 7° de la Ley 1233 de 2008¹², preceptúan que las Cooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni remitir a los asociados como trabajadores en misión con el fin de que atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto del asociado se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes, porque en tal caso se considerará al asociado trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo.

Sobre la forma como debe desarrollarse el trabajo asociado la **H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en Sentencia SL 119 del 9 de febrero de 2018, Radicado 46237**, la Alta Corporación precisó que ***“a pesar de haber el legislador permitido la vinculación a través de cooperativas de trabajo asociado, según la Ley 79 de 1988, para la prestación de servicios personales con terceros, la cual no tiene naturaleza laboral, lo cierto es que el juez puede examinar el caso a la luz del principio de la primacía de la realidad, contemplado en el artículo 53 de la Carta Política, para determinar si se presentan los rasgos distintivos de una relación de trabajo, a saber, si la prestación personal del servicio se hace de manera subordinada al tercero, de manera que la calificación no laboral del vínculo asociado puede quedar desvirtuado con lo que realmente ocurre en la materialidad.”*** (Negrillas fuera de texto).

naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que determinan los organismos nacionales e internacionales, sobre la materia.

¹² “ARTÍCULO 7o. PROHIBICIONES. 1. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión. En ningún caso, el contratante podrá intervenir directa o indirectamente en las decisiones internas de la cooperativa y en especial en la selección del trabajador asociado.

2. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como asociaciones o agremiaciones para la afiliación colectiva de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social ni como asociaciones mutuales para los mismos efectos.

3. Cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las cooperativas o las precooperativas de trabajo asociado, serán solidariamente responsables por las obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado y las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado quedarán incursas en las causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del debido proceso, y les será cancelada la personería jurídica. ...”

Y más recientemente, en **Sentencia SL 3620 del 29 de septiembre de 2020, Radicado 80383**, precisó la Alta Corporación que cuando se ha contratado a una cooperativa de trabajo asociado para que preste un servicio a un tercero, en el evento de que los trabajadores que adelanten la ejecución de las actividades en desarrollo del respectivo contrato se hallen sin duda sujetos a una subordinación típicamente laboral respecto del beneficiario del servicio, deberán ser considerados como sus trabajadores; en concreto se indicó:

“..Por esa razón, cuando se ha contratado a una cooperativa de trabajo asociado para que preste un servicio, ejecute una obra o produzca determinados bienes, es claro que en el evento de que los trabajadores que adelanten la ejecución de las actividades en desarrollo del respectivo contrato se hallen sin duda sujetos a una subordinación típicamente laboral respecto del beneficiario del servicio, de la obra o de la producción de bienes, deberán ser considerados como sus trabajadores para todos los efectos legales, por concurrir allí los elementos que configuran una verdadera relación de trabajo, como con acierto lo concluyó en este caso el Tribunal, lo cual es fiel trasunto del principio de la primacía de la realidad, elevado hoy a rango constitucional por el artículo 53 de la Constitución Política. ...”

Se concluye de lo expuesto que la relación entre las Cooperativas de Trabajo Asociado y el trabajador asociado que presta servicios a terceros no es ni debe ser una relación empleador – trabajador, sino un vínculo de naturaleza cooperativa y solidaria, máxime que las Cooperativas de Trabajo Asociado han sido creadas con el fin de que los socios cooperados se reúnan libre y autónomamente para realizar actividades o labores físicas con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios a terceros y son los mismos trabajadores quienes organizan las actividades de trabajo, con autonomía administrativa y asumiendo los riesgos en su realización.

Y en el asunto debatido, encuentra esta Magistratura que está demostrado que:

-El señor Guillermo León Cataño Meneses se afilió a la Cooperativa de Trabajo Asociado Coofema mediante un Convenio de Asociación¹³ en el que acepta que se somete a los estatutos y reglamentos de la cooperativa y a prestar

servicios a terceros en desarrollo del fin de la cooperativa que lo es la venta de servicios o mano de obra.

-La Cooperativa de Trabajo Asociado Coofema, conforme a lo establecido en el Certificado de Existencia y Representación¹⁴ tiene como objeto social, entre otros, *“Prestar servicios de mantenimiento de zonas verdes e instalaciones, aseo, limpieza vial...siempre conservando la autonomía administrativa”*.

-Contratos de prestación de servicios suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburra y el Consorcio Serconal Coofema¹⁵, en que se indicó como objeto de los mismos *“la prestación de servicios de aseo, mantenimiento de piscinas e instalaciones educativas locativas, seguridad acuática y de orden logístico para la operación y funcionamiento del Parque de las Aguas”*.

-Y el Decreto 3104 de 1979, en su artículo 1° define a las áreas metropolitanas como *“entidades autorizadas por la Constitución y organizadas por la ley, para la más adecuada promoción, planificación y coordinación del desarrollo conjunto y la prestación de servicios de dos o más municipios de un mismo departamento, dotadas de personería jurídica, autoridades y régimen especiales, autonomía administrativa y patrimonio independiente.”*

En lo relativo a la prueba testimonial, rindió declaración el señor Juan Carlos Cañas Sossa, quien ser preguntado de quien recibía órdenes el señor Guillermo León Cataño, contestó: *“En el momento ahí estábamos con Serconal”* y al preguntársele al momento que estaban en el parque de las aguas quien les daba órdenes y quien le solicitaban permiso, tenían un director del cual no recuerda el nombre, quien trabajaba con el Área; que tanto él como el causante cumplían horario que lo imponía Serconal y que para hacer la limpieza del cuarto de máquinas ellos utilizaban unas botas y unos guantes que les suministraba Serconal.

¹³ Folios 196 a 197.

¹⁴ Folios 17 a 21, 189 a 193 y 436 a 441

¹⁵ Folios 81 a 91, 122 a 124 y 379 a 385.

Analizada la prueba documental y testimonial obrante en el plenario, a la luz de lo establecido en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, encuentra esta Sala de Decisión que la vinculación del causante señor Guillermo León Cataño Meneses se dio a través de un Acuerdo Cooperativo de Trabajo Asociado, ostentando la calidad de asociado, en los términos de la normatividad antes referida, de las Cooperativas de Trabajo Asociado Coofema y Serconal y conforme a dicha normatividad los socios, son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, **sin que se hubiera desdibujado dicha figura de asociado**, por el hecho de que eventualmente tuvieran que pedir permiso a una persona de dicha entidad no desvirtúa la calidad de asociado, pues recuérdese que como lo ha indicado la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia., Sala de Casación Laboral, entre otras en la **Sentencia SL 13020 del 16 de agosto de 2017, Radicado 48531**, “...este tipo de contratación no está vedado de la generación de instrucciones, de manera que es viable que en función de una adecuada coordinación se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Lo importante, es que dichas acciones no desborden su finalidad a punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo. ...”

Así las cosas, no le asiste razón a la Juez de Primera Instancia cuando indicó en la parte considerativa de la Sentencia que existió un contrato realidad entre el causante Guillermo León Cataño Meneses y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, siendo las Cooperativas de Trabajo Asociado Coofema y Serconal simples intermediarias, ya que **no fue objeto de pretensión en la demanda que se declarará que la Cooperativa de Trabajo Asociado Coofema actuó como simple intermediaria y por tanto el verdadero empleador fuera**, ni siquiera se adujo ello en los hechos de la demanda, así como tampoco se declaró tal circunstancia en la parte resolutive de la Sentencia; recuérdese que lo que vincula en la Sentencia es lo que se indique en la parte resolutive y tal como se analizó anteriormente, en este caso se está en presencia de un trabajador asociado a una Cooperativa de Trabajo Asociado, como se reconoce por la

misma parte actora, sin que haya lugar a modificar la decisión recurrida, pues como ya se dijo, ello no fue objeto de decisión en la parte resolutive de la providencia recurrida.

De acuerdo a lo anterior, no están llamadas a prosperar las inconformidades del apoderado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en cuanto a que no es la jurisdicción laboral la competente para conocer de pretensiones de la demanda frente a dicha entidad, ya que si eventualmente se profiere una decisión condenatoria, habría lugar a entrar a determinar si es responsable solidariamente, tal como se solicitó en la demanda, pero ello sólo será en el evento de revocar la decisión, en cuanto se absolvió de la pretensión de declarar que existió culpa del empleador en el accidente en que falleció el señor Guillermo León Cataño Meneses.

3º Culpa patronal:

Frente a las inconformidades formuladas por el apoderado de la parte demandante y la solicitud de que se revoque la decisión de Primera Instancia, en cuanto se absolvió de todas las pretensiones de la demanda; encuentra esta Sala de Decisión Laboral, que no le asiste razón toda vez que:

El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo establece que hay lugar a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador, en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad laboral.

Sobre el tema del alcance de la culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo ha sido pacífica y reiterativa la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

en precisar que para que proceda la indemnización ordinaria y plena de perjuicios consagrada en el artículo 216 Código Sustantivo del Trabajo, **debe demostrarse además de la culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente**, debe probarse **el daño originado en una actividad relacionada con el trabajo y que la afectación a la integridad fue consecuencia de su negligencia** por el incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad respecto del trabajador, responsabilidad que tiene una naturaleza eminentemente subjetiva; al respecto ver las **Sentencias SL 4154 del 27 de octubre de 2020, Radicado 66411; SL 4000 del 5 de octubre de 2020, Radicado 71586; SL 204 del 6 de febrero de 2019, Radicado 56026; SL 1157 del 3 de abril de 2019, Radicado 57624; SL 10194 del 5 de julio de 2017, Radicado 61968 y SL-5619 del 27 de abril de 2016, Radicado 47907, entre otras.**

En la **Sentencia SL 287 del 22 de enero de 2019, Radicado 60099**, la H. Corte explicó que son cuatro los elementos o presupuestos que deben concurrir para que haya lugar al reconocimiento de la indemnización total y ordinaria prevista por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, a saber: (i) el hecho material (accidente de trabajo o enfermedad laboral), (ii) el daño (lesiones en la integridad física o síquica del trabajador), (iii) la culpa del empleador en su ocurrencia y (iv) el nexo causal.

Y en lo relativo a la carga de la prueba, en las Sentencias SL 4154 del 27 de octubre de 2020, Radicado 66411; SL 4400 del 20 de octubre de 2020, Radicado 80330; SL 3495 del 15 de septiembre de 2020, Radicado 76478 y la SL 2336 del 1º de julio de 2020, Radicado 72972, indicó que la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador, debiendo éste demostrar la diligencia y cuidado; pero cuando se imputa al empleador una actitud omisiva, como causante del accidente, le corresponde demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, aportando las

pruebas de que sí adoptó las medidas pertinentes para proteger la salud e integridad física de sus trabajadores; **precisando la Corte que no significa que al trabajador le baste con invocar el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección para desatenderse de cualquier tipo de carga probatoria, pues al tratarse de una responsabilidad de naturaleza subjetiva, es indispensable que estén acreditadas las circunstancias precisas en las que ocurrió el infortunio y que la causa eficiente del mismo fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente;** en concreto en la primera de las providencias se indicó:

“...Al respecto, la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador, además de que éste puede desligarse de ella demostrando diligencia y cuidado en la realización del trabajo [...]» (decisión CSJ SL2799 -2014). Adicionalmente, «cuando se imputa al patrono una actitud omisiva como causante del accidente o la enfermedad profesional, a éste le corresponde demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, aportando las pruebas de que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores» (sentencia CSJ SL7181 -2015)».

Lo segundo, es que, lo anterior no significa que al trabajador le baste con invocar el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección para desatenderse de cualquier tipo de carga probatoria, pues al tratarse de una responsabilidad de naturaleza subjetiva, es indispensable que estén acreditadas las circunstancias precisas en las que ocurrió el infortunio y que la causa eficiente haya sido la falta de previsión de la persona encargada de evitar la comisión del respectivo riesgo. En otras palabras, demostradas las causas o condiciones generadoras del riesgo, se puede realizar el juicio de atribución de responsabilidad al empleador, y exigirle la asunción de la carga probatoria que le corresponde. En caso contrario, de no conocerse la causa del suceso, mal podría afirmarse que operaba la inversión de la carga probatoria.

(...)la Corte ha reivindicado históricamente una regla jurídica por virtud de la cual, por pauta general, al trabajador le corresponde demostrar las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo, pero, por excepción, con arreglo a lo previsto en los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 1604 del Código Civil, cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, se invierte la carga de la prueba y es el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores. (Al respecto pueden verse decisiones como las CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23656, CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23489, CSJ SL, 10 may. 2006, rad. 26126, entre muchas otras).

Lo anterior no implica, no obstante, como lo plantea la censura, que le baste al trabajador plantear el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, para desligarse de cualquier carga probatoria, porque, como lo dijo el Tribunal y lo ha precisado la Sala, teniendo en cuenta que no se trata de una especie de responsabilidad objetiva como la del sistema de riesgos laborales, para que opere la inversión de la carga de la prueba que se reclama, primero deben estar demostradas las circunstancias concretas en las que ocurrió el accidente y «...que la causa eficiente del infortunio fue la

falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente...»
(CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23656.)

En torno a lo anterior, en la sentencia CSJ SL17216-2014 la Corte insistió en que «[...] corresponde a quien pretende el pago de la indemnización demostrar la inobservancia injustificada de los deberes por parte del patrono, que como se anotó también derivan del pacto contractual, y la plena incidencia que tuvo en la ocurrencia del siniestro, pues no siempre que exista un resultado dañoso aquella opera, en tanto corresponde atenderse la naturaleza de la tarea, el riesgo en su realización, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro y, fundamentalmente, la diligencia de quien lo creó.» (Negrillas fuera del texto)...

Respecto de las obligaciones del empleador el artículo 56 del Código Sustantivo el Trabajo, establece que *“incumben al patrono obligaciones de protección y de seguridad con los trabajadores”*; en lo que tiene que ver con las obligaciones particulares de seguridad en el trabajo, los Numerales 1º y 2º del artículo 57 ibídem, preceptúa que el empleador tiene la obligación de poner a disposición de los trabajadores *“instrumentos adecuados”* y procurarles *“locales apropiados y elementos adecuados, de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud”*.

De igual manera, el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, preceptúa que toda empresa está obligada a *“suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores”* y a adoptar las medidas de seguridad indispensables para la protección de la vida y la salud de los trabajadores.

Por su parte, las Resoluciones 1016 del 31 de marzo de 1989 y 2400 de 1979, del antes denominado Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, establecen que el empleador debe implementar programas de salud ocupacional, teniendo en cuenta el panorama de riesgos, tomando medidas como: informar a los trabajadores acerca de los riesgos, capacitándolo en la actividad desarrollada y el uso de herramientas, maquinarias y elementos de protección; dependiendo de la labor.

Y el artículo 84 de la Ley 9° de 1979, por medio de la cual se establecen medidas sanitarias, preceptúa que todos los empleadores están obligados a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro de los procesos de producción.

Se concluye de lo expuesto, que las disposiciones sustantivas laborales, de salud ocupacional –hoy Seguridad y Salud en el Trabajo- y riesgos laborales, han sido uniformes en comprometer al empleador a cuidar y procurar por la seguridad y salud de los trabajadores y adoptar todas las medidas a su alcance en orden a prevenir los accidentes y enfermedades profesionales.

Caso concreto:

De acuerdo a lo establecido en la normatividad y jurisprudencia referidas, concordada con la prueba documental y testimonial obrante en el plenario, encuentra esta Sala de Decisión que contrario a lo aducido por el recurrente, no se demostró la culpa suficientemente comprobada del empleador en el accidente de trabajo sufrido por el señor Guillermo León Cataño Meneses, por cuanto no hay claridad respecto a qué causó el accidente, pues se encontraba sólo, ya que su compañero de trabajo había salido del lugar de los hechos, afirmado que no sabe qué fue lo que causó el accidente; requiriéndose estar acreditadas las circunstancias precisas en las que ocurrió el infortunio y que la causa eficiente del mismo fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente estando demostrado por el contrario que al momento del accidente tenía los elementos de seguridad, se le había suministrado botas dieléctricas especiales para la labor desempeñada; había sido capacitado tanto para el desarrollo de sus labores como para primeros auxilios, en la demandada

funcionaba el Comité Paritario de Salud Ocupacional -COPASO-, lo que se encuentra demostrado con la prueba que se relaciona a continuación:

En lo que tiene que ver con prueba testimonial, rindió declaración el señor Juan Carlos Cañas Sossa^{39'38"}, quien en lo que interesa al accidente, afirmó que el día de ocurrencia del mismo él se encontraba con el señor Guillermo León Cataño Meneses haciendo un mantenimiento en el Parque de las Aguas, para lo cual se estaba utilizando una bomba sumergible; que al momento en que estaban limpiando el último cuarto que era Rio II, **él salió a fumarse un cigarrillo, cuando el causante le gritó que apagara los breques y él fue de una y los apagó.** Explicó que en el cuarto que estaban haciendo mantenimiento, es un cuarto de equilibrio, que es como una piscina más y dentro de ese cuarto hay agua; que **la bomba sumergible que estaban utilizando en el mantenimiento estaba en buen estado y no sabe qué fue lo que ocasionó el accidente** porque al momento del mismo, él se encontraba afuera del cuarto de equilibrio. Indicó que el causante era Piscinero, actividad en la cual le tocaba aspirar, echar cloro y soda cáustica; **la función que estaba desarrollando el causante al momento del accidente era propia de sus labores como piscinero.** Explicó que para hacer la limpieza del cuarto de máquinas ellos utilizaban unas botas y unos guantes que les suministraba Serconal y **al momento del accidente el señor Guillermo León Cataño tenía esos elementos de seguridad;** pero que no recuerda qué tipo de botas eran, pero que eran botas largas. Aseguró que **se les capacitaba para hacer la limpieza del cuarto de máquinas,** unas veces por el Área Metropolitana y otras la empresa Serconal. Indicó que **la empresa para ese caso de emergencias como el accidente ocurrido, contaba con desfibriladores.** Contó que al momento del accidente al causante le prestó los primeros auxilios el señor David Graciano, quien es un enfermero en el parque de las aguas. Manifestó que él trabajó 6 años en el Parque de las Aguas y cuando entró el causante laboraba allá. Sostuvo que fuera de las botas y los guantes les suministraban pantalones, un buso y gafas. **Afirmó que a la bomba de agua**

deben hacerle mantenimiento cada 3 ó 4 meses; que la bomba de máquinas estaba completamente sellada y no tenía escombros y no le entraba nada. Manifestó que no tiene conocimiento cual fue el motivo de la descarga eléctrica en la piscina. Sostuvo que el señor Guillermo León Cataño Meneses tenía experiencia y había sido capacitado en la labor que estaba realizando al momento del accidente; que las capacitaciones eran cada uno o dos meses y los elementos de seguridad los suministraba Serconal. Sostiene que no se tiene conocimiento de cuál fue la causa o motivo por el cual se produjo el accidente en que falleció el señor Guillermo León Cataño Meneses.

En lo relativo a la prueba documental, obra en el plenario la siguiente:

-Constancias de capacitación al señor Guillermo León Cataño Meneses para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en cuanto a “arranque y puesta en operación. Procedimiento de llenado. Control de Procesos biológicos. “Cribado de las aguas residuales -Bombeo de las aguas residuales-”¹⁶.

-Constancia de asistencia del causante a capacitaciones en Primeros Auxilios¹⁷.

-Constancia de suministro de botas dieléctricas al causante Guillermo León Cataño Meneses el 5 de septiembre de 2008, así como el suministro de gafas, cinturones de seguridad, guantes industriales calibre 25, guantes de carnauba y tapabocas¹⁸.

¹⁶ Folios 108 a 112 y 207 a 211.

¹⁷ Folios 113 117, 216 a 219, 222 a 223 y 225.

¹⁸ Folios 118 y 206.

-Plan de capacitación, en que se indican como temas a realizar, entre otros, los siguientes: primeros auxilios para riesgo eléctrico, autocuidado, introducción a los factores de riesgo en salud ocupacional, bomberotecnia -brigada contra incendios-; conformación y capacitación de brigada de emergencias, elaboración de plan de evacuación, atención de emergencias, trabajo en alturas¹⁹.

- Constancia de asistencia del causante Guillermo León Cataño Meneses a capacitaciones sobre manejo de residuos sólidos²⁰.

-Acta de conformación de Comité Paritario de Salud Ocupacional²¹.

-Constancia de asistencia del causante a capacitaciones en Primeros Auxilios²².

-Formato sobre informe del accidente de Trabajo del causante Guillermo León Cataño Meneses²³.

-Acta de Reunión del Copaso, en la cual se indicó: ***“Se analizaron las causas directas, indirectas y organizativas del accidente del trabajo el accidente donde no se evidencian condiciones de inseguridad o descuido en el desempeño de la tarea que se llevada a cabo. Guillermo utilizaba botas y guantes en el momento del accidente. Se contó con el proceso adecuado para la conexión de la Bomba sumergible, la cual es realizada, únicamente por el profesional para ello.”***²⁴

-Informe de la investigación del accidente de Trabajo del causante Guillermo León Cataño Meneses, realizado por Gestión Humana de Coofema, en

¹⁹ Folio 200.

²⁰ Folio 212.

²¹ Folios 213 a 215

²² Folios 113 a 117, 216 a 219 y 220 a 221.

²³ Folios 229 y 234.

²⁴ Folio 230.

que sobre el accidente se indica que “El señor Guillermo León se encontraba en compañía de Juan Carlos Cañas Sosa realizando el proceso de mantenimiento del cuarto de equilibrio Río #2 (achicando el agua que se acumula en el lugar, el cual alcanza varios cms. de altura). Juan Carlos sale del cuarto a tomar un poco de aire y al instante escucha el grito de auxilio del señor Guillermo (apáguela, apáguela), al parecer se presentó una falla en la bomba sumergible...” se indica como causas inmediatas que **“no se evidencian condiciones de inseguridad o descuido en el desempeño de la tarea que se llevaba a cabo. ...Se contó con el proceso adecuado de la conexión de la bomba sumergible. ...Guillermo utilizaba botas y guantes como protección, en el momento del accidente”**²⁵.

Analizada en su conjunto la prueba documental y testimonial antes referida, a la luz de lo establecido en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, encuentra esta Sala de Decisión que no se demostró culpa suficientemente comprobada del empleador en el accidente de trabajo sufrido el 19 de noviembre de 2008 por el señor Guillermo León Cataño Meneses, como legal y jurisprudencialmente se exige, ya que como se explicó, la condena a la indemnización ordinaria y plena de perjuicios consagrada en el artículo 216 Código Sustantivo del Trabajo, exige además de la demostración del daño originado, en este caso la muerte, la prueba de que la afectación a la integridad fue consecuencia de la negligencia del empleador en el acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de sus trabajador, lo que en el presente caso encuentra esta Sala de Decisión Laboral no se demostró en este caso, máxime que no se tiene la certeza de que fue lo que ocurrió exactamente al momento del accidente, pues el causante se encontraba sólo y el único testigo fue claro en manifestar que la bomba sumergible estaba en buen estado de funcionamiento y es sellada y que para ese mantenimiento del cuarto de máquinas suministran botas y guantes apropiados, de lo cual obra prueba como ya se indicó al momento de relacionar la prueba documental, así el causante era una persona que tenía experiencia en ese oficio y estaba capacitado para esta labor, todo lo

²⁵ Folios 231 a 233.

cual se corrobora con la prueba documental allegada al plenario, por lo que absolvió de la indemnización de perjuicios

Lo anterior anotándose que se demostró el suministro de botas dieléctricas al causante Guillermo León Cataño Meneses el 5 de septiembre de 2008²⁶, por lo que no le asiste razón al recurrente cuando aduce los implementos de seguridad suministrados al causante no eran los adecuados para poder menguar cualquier tipo de incidencia eléctrica en un cuarto de máquinas, infiriendo que las botas que tenía el causante no aislaban la electricidad al entrar al cuarto de máquinas.

En cuanto a que no se tiene un detalle que permitan determinar cuáles fueron las capacitaciones o información detallada que le pudieron suministrar al demandante durante los 14 años que estuvo al servicio en el parque de las aguas, de las que se pudiera inferir que efectivamente él tenía pleno conocimiento de que no podía ingresar a un cuarto de máquinas donde podía recibir una descarga eléctrica; encuentra esta Magistratura que tal como se indicó anteriormente, si se demostraron capacitaciones al causante fallecido, no siendo exigible ello por 14 años, en tanto se reconoce en la demanda que con las accionadas el vínculo se dio desde el año 2007, no estando demostrado ni aducido que al cuarto de máquinas no se pudiera entrar o se tuviera algún tipo de restricción como ahora se aduce por el recurrente.

De igual manera no le asiste razón al recurrente en cuanto a sus inconformidades respecto de la atención dada al señor Guillermo León Cataño Meneses luego del accidente, toda vez que el declarante Juan Carlos Cañas Sosa fue contundente en indicar que si había un desfibrilador, siendo uniforme la prueba documental y testimonial en indicar que el causante recibió ayuda inmediata tanto del paramédico David Esteban Graciano, así como de varios compañeros de trabajo.

²⁶ Folios 118 y 206.

Así las cosas, de acuerdo a lo expuesto, esta Magistratura confirmará la decisión en cuanto absolvió del reconocimiento y pago de indemnización de perjuicios al no haberse demostrado culpa patronal en el accidente sufrido por el señor Guillermo León Cataño Meneses.

Corolario de lo expuesto, esta Sala de Decisión Laboral, **confirmará** la Sentencia de Primera Instancia, que en vía de Apelación se revisa, incluida la condena en costas.

COSTAS:

No se condenará en costas en esta Segunda Instancia, al no haber prosperado ninguno de los recursos formulados. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que se revisa en **Apelación**; conforme lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.


SEGUNDO: NO SE CONDENA en costas en esta Segunda Instancia; según lo explicado en la parte considerativa.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que trata el artículo 9° del Decreto Legislativo 806 de 2020) y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **190** del 10 de diciembre de 2020

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>